



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veinte de octubre de dos mil veintitrés

Radicado: 05001 31 03 021 2021 00374 01

Decisión: Confirma

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto proferido el 16 de agosto de 2023 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, en el que rechazó de plano la solicitud de nulidad.

ANTECEDENTES

1. En audiencia celebrada el 25 de julio de 2023, el juzgado de primera instancia profirió sentencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución promovida a instancia de María Mercedes Molina Cárdenas frente a la Constructora Giraldo Alzate S.A.S. y la sociedad Desarrolladora Nacional de Proyectos S.A.S.

2. El 28 de julio siguiente, la Constructora Giraldo Alzate S.A.S. presentó solicitud de nulidad de la “actuación surtida el 25 de julio de 2023”. Al efecto argumentó:

Que el juez hizo la lectura de la sentencia desde su computador, lo que difiere del juicio oral; no observó a los asistentes a la audiencia, de lo que se colige la falta de compromiso con el caso y las partes. Esto contraría lo dispuesto

en el estatuto procesal, en cuanto a que las actuaciones judiciales deben surtirse de manera oral.

Que la decisión tomada no se dio “a viva voz” porque el juez se apoyó en un archivo de su computador, lo que genera dudas sobre su imparcialidad y la transparencia.

Que la parte resolutive no se encontraba en la mente del juez porque recurrió a un dispositivo tecnológico para hacer la precisión respecto de las pretensiones, excepciones y razonamientos que apoyaron su decisión.

Que la previsión del numeral 6° del artículo 107 *ibídem*, constituye una prohibición en cuanto a que las intervenciones orales no pueden ser sustituidas por escritos. En la audiencia el juez debió anunciar el sentido del fallo con una breve exposición de sus fundamentos y emitir la decisión escrita dentro de los diez días siguientes.

Que no se evidencia que el juez hubiera realizado un razonamiento entre los hechos de la demanda y la contestación para verificar su coherencia, interviniendo de manera activa en el desarrollo al interrogar a las partes, con especial sujeción de la solidaridad del consorcio; no se evidencia el análisis del interrogatorio de parte con los demás medios de prueba presentados, ni tampoco la conclusión con una síntesis de lo que resultó probado y lo que no.

Que no se verifica la resolución al problema de derecho encuadrando las alegaciones probadas en el supuesto de la norma aplicable al caso.

Que la actuación adolece de un requisito esencial en la estructura de la sentencia, como lo es la actividad intelectual del juzgador en la que se exige un examen crítico de las pruebas y la explicitación de los razonamientos legales, como premisas básicas de la determinación.

3. El 16 de agosto de 2023 el *a quo* rechazó de plano la solicitud de nulidad porque esta carece de fundamento en tanto no existe en el ordenamiento jurídico ninguna causal para invalidar la sentencia por haberse efectuado la lectura del fallo emitido.

4. El apoderado judicial de la sociedad Constructora Giraldo Alzate S.A.S., presentó recurso de apelación, insistiendo en los argumentos de la solicitud de nulidad.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso de apelación conforme la competencia atribuida por el numeral 6° del artículo 321 del CGP, según el cual, es apelable el auto que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva.

La sociedad Constructora Giraldo Alzate S.A.S. presentó solicitud de nulidad de la actuación surtida el 25 de julio de 2023 e invocó como fundamento normativo lo dispuesto en el artículo 132 *ibídem*, que establece el deber que tiene el juez de ejercer control de legalidad una vez agotada cada etapa del proceso. Asimismo, estableció como causal para su petición, la contenida en el numeral 6° del artículo 133 *ib.*, esto es, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

Pese al anterior escenario planteado por el recurrente, de la revisión de la petición anulativa se advierte que la actuación que considera nula es la sentencia proferida el 25 de julio de 2023 por el juzgado de primera instancia en la que se ordenó seguir adelante con el cobro ejecutivo.

El *a quo* rechazó tal pedimento, teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 135 del CGP, según el cual, se rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en el estatuto procesal. Al efecto, señaló que la solicitud “carece de todo fundamento jurídico, y es completamente improcedente, ya que no existe en el

ordenamiento jurídico colombiano ninguna causal de nulidad por tan desvergonzado motivo” (cfr. archivo 94).

Para desatar la presente alzada, el Tribunal deberá resolver un problema específico. El recurrente insiste en que los motivos de invalidez tienen una causa legal perfectamente justificada. El juez de primer grado no encontró el referido soporte legal que sustente la alegación de nulidad, con base en el inciso final del artículo 135. Reprocha el impugnante que el juez haya leído la sentencia y que para esto se hubiera valido del uso de un computador, lo que impidió que el fallo se hubiera proferido “a viva voz”. Entonces se pregunta la Sala: ¿las supuestas irregularidades alegadas por la parte recurrente configuran una causal de nulidad? ¿El *a quo* rechazó de plano conforme a derecho la solicitud presentada sobre alegación de nulidad procesal?

La nulidad procesal es un medio de corrección regulado en la norma procesal a efectos de proteger el derecho fundamental al debido proceso, y de forma específica el derecho de defensa o contradicción. El ejercicio de este medio se constituye asimismo en una garantía frente al justiciable, pero sin desconocer que esa facultad se comprende en un contexto de lo fundamental. El proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio dirigido a la satisfacción de unos fines y, por supuesto, a la resolución de fondo de un caso.

Resulta inadmisibles agotar un trámite de nulidad si su alegación no se justifica en ese contexto de la garantía y el derecho fundamental. Para esto, la ley procesal ha consagrado unas causales como son las establecidas en el artículo 133 del CGP, las cuales pueden alegarse en cualquiera de las instancias, en principio, antes de que se dicte sentencia, “o con posterioridad a esta si ocurrieren en ella” (artículo 134).

Si el supuesto fáctico no se encuadra en una causal de las referidas en la norma, o en hechos que pudieron alegarse como excepción formal o por

quien carezca de legitimación, o si se propone después de saneada, es menester rechazarla de plano.

Vale destacar que, en ningún momento, el legislador erigió simples irregularidades o formalismos insulsos meramente procedimentales en supuestos de invalidez procesal. Sólo es viable dar trámite a una alegación de nulidad en la medida que el solicitante pueda justificar la irregularidad en este contexto. En últimas, se trata de salvaguardar la forma y la contradicción.

Así, descendiendo al caso concreto, el Tribunal advierte, de la diatriba expuesta por el recurrente, que dos tipos de argumentos justificaron la alegación formulada. Unos, referidos al fondo de la sentencia, esto es, vinculados con discrepancias frente a argumentos ofrecidos por el juez de primer grado; otros, vinculados con la forma misma en que fue expresada la sentencia.

Resulta manifiestamente improcedente la alegación considerada por el solicitante de la nulidad, tal y como lo concluyó el *a quo*, por cuanto, la misma tiene como fundamento unos reparos o motivos de inconformidad en contra de la sentencia, que sólo podían ser cuestionados a través de un recurso como el de apelación, mas no por medio de nulidad.

Nótese que las discrepancias sobre la valoración de la prueba y las normas sustanciales aplicables al caso concreto sólo pueden hacerse visibles a través de un recurso como el de apelación. Si la parte demandada omitió esa oportunidad para enfilear los reparos en cuanto al análisis y la valoración probatoria efectuada por el juez, no puede acudir a la figura de la nulidad para tratar de revivir una actuación que precluyó y dejó pasar.

Ahora bien, en lo relativo a los argumentos de orden formal, habrá que evaluar la relación entre las causales de nulidad y los requisitos establecidos en la norma procesal para realizar la sentencia. No hay duda que la sentencia debe ser proferida por el mismo juez que escuchó los alegatos de conclusión

o la sustentación del recurso de apelación; asimismo, debe tenerse presente que la sentencia debe resolver íntegramente la instancia. Sobre sus formalidades y contenido deberá observarse las prescripciones establecidas en los artículos 279 y 280 del CGP.

Debe tenerse en cuenta que, según la previsión del artículo 373.5 del CGP, en la audiencia de instrucción y juzgamiento el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado.

Esa disposición en modo alguno le impide o le prohíbe al juez que utilice diversas herramientas encaminadas al correcto direccionamiento del juicio y la subsiguiente emisión de la sentencia que ponga fin a la instancia. De ese modo, no puede concluirse que el juez transgrede las reglas de la oralidad cuando hace uso de dispositivos tecnológicos, apuntes, notas, bibliografía, etc., que le sirvan como soporte de su decisión. Tal circunstancia mucho menos puede poner en duda la imparcialidad y la “transparencia” del juez como lo sostiene el impugnante.

Salta a la vista la manifiesta improcedencia del trámite de nulidad. Los motivos de alegación del solicitante no tienen ningún soporte legal. No hay ninguna causal que establezca la posibilidad de invalidar actuación procesal o sentencia porque el juez hizo uso de un computador.

Cómo reprocharle al juez que, al momento de acudir al juicio se haya apoyado en documentos físicos o electrónicos, a través de un ordenador. No hay garantía procesal ni principio del debido proceso que se esté desconociendo. Inviabile sería considerar que el recurso que el juez utiliza en este sentido constituya un vicio que conduzca a la invalidez. Ni de la literalidad de las causales de nulidad puede desprenderse un despropósito en este sentido, ni tampoco podría alegarse una irregularidad en un ámbito constitucional. Se trata de entender simplemente que existen distintas formas de manifestarse

oralmente por parte del director del Despacho, más allá que un pronunciarse “a viva voz” como lo esperaba el recurrente.

Según el artículo 375.5 *ejusdem*, cuando no es posible dictar sentencia en forma oral, el juez debe dejar constancia de las razones de esa circunstancia, anunciar el sentido del fallo y emitir la decisión escrita dentro de los diez días siguientes. Sobre este punto, aun a sabiendas de extender la presente motivación más allá del cometido del problema jurídico inicialmente formulado, consistente en si se debía rechazar de plano o no la solicitud de nulidad, valga aclarar que, en el marco del procedimiento del Código General del Proceso, la regla general es que una vez recaudada la prueba y habiéndose presentado los alegatos finales, el juez dicte sentencia. Por eso, no puede exigirse como lo pretende el recurrente que el juez profiera sentencia escrita, por cuanto esta posibilidad da cuenta de un supuesto normativo que en ningún momento impone el sistema de escrituralidad.

Estamos frente a un régimen normativo en el que la regla es el sistema o tipo de oralidad, y en el que el juez puede optar en ciertas circunstancias por lo escrito, sin que lo último se imponga como un deber-poder frente al juez. Además, resulta contradictorio que el recurrente reclame la emisión de la sentencia por escrito y a la vez cuestione que el juez no dictó la sentencia “a viva voz” porque la leyó.

Así las cosas, al advertirse que los argumentos planteados por el impugnante constituyen verdaderos motivos de reparo frente a la sentencia de primera instancia y que no es a través de la nulidad como debían alegarse, la decisión recurrida habrá de ser confirmada. Igual suerte ocurre con los argumentos ofrecidos en lo que a las formas de la sentencia proferida se refiere, como quiera que estos en modo alguno constituyen una causal de nulidad.

El rechazo de plano del 16 de agosto de 2023 se estima acertado, razón por la cual se **confirmará** la decisión.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil, **RESUELVE: Confirmar** el auto del 16 de agosto de 2023 proferido por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medellín, en virtud de lo expuesto en la parte motiva. Sin condena en costas a falta de su causación.

Notifíquese y cúmplase


Martín Agudelo Ramírez
Magistrado